

51

**JUZGADO VEINTIUNO ADMINISTRATIVO ORAL DEL  
CIRCUITO DE BOGOTÁ  
SECCIÓN SEGUNDA**

**EXPEDIENTE No. 2017-357**

Bogotá D. C., 03 NOV 2017

Procede el Despacho al estudio de la **CONCILIACION EXTRAJUDICIAL** celebrada entre la señora **LAURA MARÍA CASTILLO DE MUÑOZ** y la **CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL** ante la **PROCURADURIA 86 JUDICIAL I PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS**, para verificar el cumplimiento de los requisitos y la legalidad de la misma.

**ANTECEDENTES**

**I. SOLICITUD DE CONCILIACIÓN** (fls. 28 a 29).

**Objeto de la conciliación:**

1. Se declare la nulidad del oficio No. 5879 del 01 de abril de 2016 por medio del cual la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, negó la petición de reajuste de la asignación de retiro de la convocante.

2. Que decrete el reajuste de la sustitución de la asignación de retiro con fundamento en la variación del IPC desde el año 1997 hasta el año 2004, en los años más favorables.

3. Reajustar la sustitución de la asignación de retiro a partir del 01 de enero de 2005 con fundamento en el principio de oscilación tomando como base de liquidación, el producto obtenido del reajuste por efectos del IPC para el periodo comprendido entre los años 1997 a la fecha.

**II. LA CONCILIACIÓN** (fls. 31 a 33).

(...)

**"En este estado de la diligencia se le concede el uso de la palabra al apoderado de la PARTE CONVOCANTE para que manifieste sus pretensiones:** a lo que contesta que me ratifico en los hechos y pretensiones de la solicitud de conciliación y su subsanación, y preciso que las

52

pretensiones son las siguientes: "Se decreta la nulidad y restablecimiento del derecho de oficio, acto administrativo 5879 del 1 de abril de 2016 por medio del cual la entidad, Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional respondió el ID No. 130926. Por la cual no accedió a las pretensiones del accionante. Que se decreta el reajuste de la asignación de sustitución mensual de retiro con fundamento en la variación del IPC desde el año 1997 y hasta el año 2004. Más aun, en los años cuando el incremento de la asignación de retiro y pensión estuvo por debajo del índice de precios al consumidor. Así como el reajuste de la asignación de sustitución mensual de retiro a partir del primero (1) de enero de 2005 con fundamento en el principio de oscilación, tomando como base de liquidación, el producto obtenido del reajuste por efectos de IPC para el periodo comprendido entre los años 1997 y hasta la fecha. La actualización y liquidación del valor a cancelar por concepto de asignaciones de retiro y mesadas pensionales dentro de la sustitución pensional de la convocante. Y el reconocimiento de la indexación en un setenta y cinco por ciento (75%)". **Seguidamente se le concede el uso de la palabra a la apoderada de la PARTE CONVOCADA CASUR, con el fin que se sirva indicar que decidió el comité de Conciliación respecto de la solicitud que hoy nos convoca:** El comité de conciliación de la entidad mediante acta No.2^ del 9 de octubre de 2017 consideró que le asiste derecho a la parte convocante que S 3 le incremente la asignación mensual de retiro conforme al IPC para el año 1997, 1999 y 2002 a la señora LAURA MARÍA CASTILLO DE MUÑOZ A en su condición de beneficiaria del ex agente HERACLIO ANTONIO MUÑOZ GARAVITO. De igual manera teniendo en cuenta la prescripción cuatrienal del Decreto 1213 de 1990 se le pagará a partir del 15 de febrero de 2012 en razón a que la solicitud de reajuste de IPC fue radicada en la Entidad el 15 de febrero de 2016. Se le reconocerá el 100 % del capital como derecho esencial, se conciliará el 75% de la indexación y se pagará dentro de los seis (6) meses siguientes, tiempo en el cual no habrá lugar al pago de intereses, plazo que empezara a contar una vez se presente solicitud de pago acompañada de los documentos legales y pertinentes incluido el auto de aprobación del presente acuerdo, en los anteriores términos el concilia de forma total. De igual manera los valores a cancelar se discriminan de la siguiente manera: 1) 100% CAPITAL la suma de SIETE MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SIETE PESOS M/CTE (\$7.069.507). 2) Valor indexación en un 75% la suma de SETECIENTOS DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$702.785), VALOR CAPITAL MAS 75% DE LA INDEXACIÓN SIETE MILLONES SETECIENTOS CUATRO PESOS M/CTE (\$ 4 275.704) y menos descuentos sanidad DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (275.984) para un total a pagar de SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE (\$7.220.604). Realizándose un incremento en la asignación de retiro por valor de \$103.129, quedándole una asignación de retiro con los reajuste de ley correspondientes en un valor de \$1.966.601. Estos valores que se encuentra reflejados en la liquidación de fecha 12 de octubre de 2017 y que se allegan a esta diligencia en siete (7) folios y el acta en un folio. Firma el acta la Secretaria. JENNIFFER ALEXANDRA MUÑOZ ARIAS. Lo anterior para los fines pertinentes y el traslado correspondiente al señor apoderado de la parte convocante aquí presente. Se le concede el uso de la palabra al apoderado de la parte convocante quien manifiesta: Acepto en su totalidad el ofrecimiento del incremento que hace CASUR a través de su apoderada aquí presente".

(...)

### CONSIDERACIONES

Para decidir acerca de la aprobación o improbación de la Conciliación Prejudicial contenida Acta REG-IN-CE-000 con radicación No. 89080 del Veinticinco (25) de Agosto de Dos Mil Diecisiete (2017);y audiencia realizada el Diecisiete (17) de Octubre de dos mil Diecisiete (2017), el Despacho seguirá las orientaciones dadas en materia de conciliación por el Decreto 1818 de 1998<sup>1</sup> en concordancia con

<sup>1</sup> "Por medio del cual se expide el Estatuto de los mecanismos alternativos de solución de conflictos."

53

lo dispuesto por las Leyes 23 de 1991 y 446 de 1998, ley 1285 de 2009 y 1395 de 2010, que exigen la revisión de los siguientes aspectos: la procedibilidad y la legalidad.

## I. PROCEDIBILIDAD.

Son conciliables las controversias susceptibles de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho<sup>2</sup>, siempre y cuando reúnan los requisitos de forma y de fondo exigidos por las normas que regulan la materia, conforme lo predica el numeral 6 del artículo 46 del decreto 1818 de 1998, lo que indica que además de acreditar los presupuestos, deben estar presentes todos los requisitos exigidos por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Ley 1437 de 2011, y demás normas procesales para el reconocimiento del derecho reclamado<sup>3</sup>.

1. El carácter particular y patrimonial del asunto. El presente caso se cumple este presupuesto porque se trata de una controversia integrada por dos extremos la señora **LAURA MARÍA CASTILLO MUÑOZ** y la **CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL - CASUR**; quiénes solucionaron las diferencias sobre el reajuste de la sustitución de la asignación mensual de retiro, con base en el incremento del IPC, a partir del año 1997 hasta el año 2004.

2. El agotamiento de la actuación administrativa. La señora Celina Toscano, mediante petición No. 130926 del 15 de febrero de 2016 (según oficio No. 5879/OAJ del 01 de abril de 2016 fl. 5 a 6 Vto), solicito ante la entidad convocada la reliquidación, reajuste y pago de la asignación por sobreviviente, con base en aumento del Índice de Precios al Consumidor, cuando éste fuera superior al incremento realizado por el Gobierno Nacional.

La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, mediante oficio No 5879/OAJ del 01 de abril de 2016, negó lo solicitado por la actora y, informo que

<sup>2</sup> Lo dice el Art. 59 de Ley 23 de 1991 modificado por el Art. 70 de la Ley 446 de 1998, repetido en Art. 56 del Decreto 1818 de 1998,

<sup>3</sup> Según el Art. 61 de la Ley 23 de 1991 modificado por el Art. 81 de la Ley 446 de 1998 y reiterado en el Art. 63 del Decreto 1818 de 1998.

debe presentar por intermedio de apoderado, solicitud de conciliación ante la Procuraduría Delegada ante lo Contencioso Administrativo (fl. 5 a 6 Vto).

3. Caducidad de la acción.

Por recaer la conciliación sobre la reliquidación de una prestación periódica, no se encuentra sujeta a caducidad, en los términos del artículo 164 literal c) del C.P.A.CA, permitiendo que la demanda sea presentada en cualquier tiempo.

4. Las pruebas<sup>4</sup>. El acuerdo tiene como soporte los siguientes documentos:

- Solicitud de conciliación prejudicial radicada ante la Procuraduría General de la Nación (fls. 26 a 27).

- Copia de envío de solicitud de conciliación prejudicial al Director General de Caja De Sueldos De Retiro De La Policía Nacional y Copia de envío de solicitud de conciliación prejudicial a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (fls. 28 a 29)

- Oficio No. 5879/OAJ del 01 de abril de 2016, mediante el cual la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, negó el reajuste solicitado y, indico que debía presentar por intermedio de apoderado, solicitud de conciliación ante la Procuraduría Delegada ante lo Contencioso Administrativo (fl. 5 a 6 Vto)

- Copia de la Resolución No. 00267 del 02 de marzo de 1973, por medio de la cual se reconoció asignación de retiro al señor AG @ Horacio Antonio Muñoz Garavito, a partir del 04 de noviembre de 1972 (fl.8 a 9).

- Resolución No. 18729 del 07 de noviembre de 2012, mediante la cual se reconoce la sustitución de la asignación mensual de retiro a la Sra. Laura María Castillo de Muñoz, en calidad de cónyuge supérstite del Sr. Horacio Antonio Muñoz Garavito, a partir del 22 de julio de 2012 (fls. 10 a 11)

---

<sup>4</sup> De acuerdo al Art. 60 de la Ley 23 de 1991 modificado por el Art. 80 de la Ley 446 de 1998.

55

- Auto No. 89080 del 19 de septiembre de 2017, mediante el cual la Procuradora 86 Judicial I para asuntos Administrativos, admite la solicitud de conciliación extrajudicial presentada por la Sra. Laura María Castillo de Muñoz (fl. 30)

- Copia la certificación del Comité de conciliación de la secretaria técnica del comité de conciliación de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (fl. 34)

- Indexación del Índice de Precios al Consumidor que se debe cancelar a la señora Laura María Castillo de Muñoz, efectuada por el Grupo de liquidación de conciliaciones (fl. 12 a 17).

## II. LEGALIDAD.

Con el fin de determinar si es conforme a la Constitución y la ley, la CONCILIACIÓN PREJUDICIAL celebrada por las partes, registrada en el acta No. 277-2015 de conciliación REG – IN – CE -000, solicitud con radicación No. 89080 del Veinticinco (25) de agosto de 2017, realizada el Diecisiete (17) de Octubre de Dos Mil Diecisiete (2017), se procederá a estudiar el fondo del asunto pactado.

### 1. SITUACIÓN JURIDICA GENERAL

En la Constitución de 1991, a través de los Arts. 217 y 218, se determinó que el régimen salarial y prestacional de los miembros de la Fuerza Pública fuera de carácter especial, entre otras razones por la naturaleza del servicio prestado al Estado, y según el Art. 150 numeral 19, literal e), del Estatuto Superior, en forma concurrente corresponde al Legislador y al Ejecutivo Nacional fijar dicho régimen, así: el Congreso señala los objetivos y criterios generales y el Gobierno Nacional los desarrolla por medio de los actos administrativos.

Atendiendo a tales postulados, el Congreso profirió la Ley 4ª de 1992, destacándose el siguiente enunciado:

*"ARTICULO 13. En desarrollo de la presente Ley el Gobierno Nacional establecerá una escala gradual porcentual para nivelar la remuneración del personal activo y retirado de la Fuerza Pública de conformidad con los principios establecidos en el artículo 20.*

56

*PARAGRAFO. La nivelación de que trata el presente artículo debe producirse en las vigencias fiscales de 1993 a 1996."*

Por su parte, el Gobierno Nacional en cumplimiento de esta directriz, a partir del 1º de enero del año 1996, señaló la escala gradual porcentual que debía regir cada año, a través de los Decretos 107/96, 122/97, 58/98, 62/99, 2724/00, 2734/01, 745/02, 3552/03 y 4158/04.

Dicha escala se entiende que acoge el principio de oscilación reglamentado por los Decretos 1211, 1212 y 1213 de 1990, del cual tratan específicamente los artículos 169, 151 y 110 de tales decretos respectivamente, y cuya redacción se realizó en idénticos términos con algunas salvedades, así:

**OSCILACION DE ASIGNACIONES DE RETIRO Y PENSIONES.** *Las asignaciones de retiro y las pensiones de que trata el presente Decreto, se liquidarán tomando en cuenta las variaciones que en todo tiempo se introduzcan en las asignaciones de actividad para cada grado y de conformidad (...). En ningún caso aquéllas serán inferiores al salario mínimo legal. Los Oficiales y Suboficiales (Agentes) o sus beneficiarios no podrán acogerse a normas que regulen ajustes prestacionales en otros sectores de la Administración Pública, a menos que así lo disponga expresamente la Ley.*

**PARAGRAFO.** *Para la oscilación de las asignaciones de retiro y pensiones de Oficiales Generales y Coroneles, se tendrá en cuenta como sueldo básico, el porcentaje que como tal determinen las disposiciones legales vigentes que regulen esta materia, más las partidas señaladas en el art. (...). (Nota: este parágrafo no se haya en el Decreto 1213 y la parte entre paréntesis son los términos diferentes excluidos).*

Bajo la órbita del principio mencionado se ha entendido que los incrementos introducidos en los factores salariales del personal activo repercuten en las prestaciones periódicas de los miembros retirados, es decir, el reajuste opera automáticamente cuando se altera la remuneración de los oficiales, suboficiales y agentes al servicio del Estado.

Sin embargo, por medio de la Ley 238 de 1995 se adicionó el Art. 279 de la Ley 100 de 1993, en el sentido de conceder los beneficios establecidos en los artículos 14 y 142 del sistema general de seguridad social integral a la Fuerza Pública.

Inicialmente, la Ley 100 de 1.993 había dictaminado que:

SA

*Artículo 279. Excepciones. El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la presente Ley no se aplica a los miembros de las Fuerzas Militares y de Policía Nacional, ni al personal regido por el Decreto-Ley 1214 de 1990, con excepción de aquel que se vincule a partir de la vigencia de la presente Ley, ni a los miembros no remunerados de la Fuerza Pública.*

(...)

Posteriormente, la Ley 238 de 1995, expresó:

*"ARTÍCULO 1o. Adiciónese al artículo 279 de la Ley 100 de 1993, con el siguiente párrafo:*

*"Párrafo 4. Las excepciones consagradas en el presente artículo no implican negación de los beneficios y derechos determinados en los artículos 14 y 142 de esta ley para los pensionados de los sectores aquí contemplados".*

*ARTÍCULO 2o. VIGENCIA. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias."*

El Art. 14 citado en la norma transcrita dice:

*"Artículo 14. Reajuste de pensiones. Con el objeto de que las pensiones de vejez o de jubilación, de invalidez y de sustitución o sobrevivientes, en cualquiera de los dos regímenes del sistema general de pensiones, mantengan su poder adquisitivo constante, se reajustarán anualmente de oficio, el 1 de enero de cada año, según la variación porcentual del Índice de Precios al Consumidor, certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior. No obstante, las pensiones cuyo monto mensual sea igual al salario mínimo legal mensual vigente, serán reajustadas de oficio cada vez y con el mismo porcentaje en que se incremente dicho salario por el Gobierno."*

Dentro del contexto anterior, de las normas enunciadas en precedencia, aparentemente surge un conflicto entre el reajuste que obra por el principio de oscilación y el que procede conforme al IPC, pero tal parecer no tiene asidero, pues examinada la materia se deduce que ambos mecanismos funcionan en forma armónica y complementaria; vale anotar, la aplicación no es excluyente o contradictoria sino preferencial o sustitutiva dependiendo del punto de vista del observador.

Veamos, a la entidad le corresponde efectuar el reajuste de la prestación que sea mas favorable para el servidor público, conforme a la normatividad vigente, así, el administrador en primer lugar aplicará en la liquidación las normas de carácter especial que para cada anualidad expide el Gobierno Nacional y que desarrollan el principio de oscilación, y luego, realiza la misma liquidación con base en el indicador del DANE, al comparar los resultados arrojados por cada vía mencionada, se

aplicará el reajuste que resulte mayor, que sustituye al que resulte menor, vale reiterar, se escoge la más favorable para el servidor público en términos de la cuantía del reajuste.

De esta forma, se recogen las directrices de la Corte Constitucional consignadas en la Sentencia C - 941 de 2003 que declaró exequible el principio de oscilación como sistema de reajuste de la asignación de retiro, haciendo la salvedad que en cuanto a la posición de la Corte Constitucional asumida en esa providencia en el sentido de que la asignación de retiro no era comparable a las pensiones, fue corregida posteriormente, mediante Sentencia C - 432 de 2004 cuando indicó que la naturaleza de esa prestación era pensional, entonces, bajo tal entendido es admisible también, aplicar el mandato de la Ley 238 de 1995, en forma alternativa al principio de oscilación en los términos ya consignados en precedencia.

El anterior procedimiento que compagina y armoniza métodos y directrices para reajustar la prestación objeto de estudio, es más ajustado a los principios Constitucionales, como el contenido en la sentencia C - 862 de 2006, en la cual la Corte determinó que, en el Art. 53 del Estatuto Superior, se encuentra consagrado el **derecho constitucional a mantener el poder adquisitivo**, en cabeza de los pensionados y a cargo del Estado, motivo por el cual rechazar la aplicación de los reajustes por el sistema inflacionario, contraria derechos de rango constitucional y no solamente de orden legal.

Se concluye, que aceptar la inclusión dentro del régimen prestacional de la Fuerza Pública del sistema de reajuste con fundamento en la inflación, es más consonante con la equidad, la justicia y la igualdad<sup>5</sup>, toda vez que es un hecho notorio para el más humilde ciudadano que la inestabilidad de nuestra economía y su matiz inflacionario influye negativamente sobre la capacidad de compra de los

---

<sup>5</sup> "En reiteradas oportunidades esta Corporación se ha manifestado en relación con el establecimiento de los regímenes excepcionales, ha considerado que ellos se ajustan al ordenamiento constitucional, en cuanto suponen la existencia de unas condiciones o prestaciones más favorables para los trabajadores a quienes comprende y cuya finalidad es la preservación de los derechos adquiridos. Pero, cuando consagren para sus destinatarios un tratamiento inequitativo frente al que se otorga a la generalidad de los trabajadores cobijados por el régimen previsto en la ley 100 de 1993, estas regulaciones deberán ser descalificadas en cuanto quebrantan el principio constitucional de la igualdad." Sentencia C- 1050 de 2000 M.P. Antonio Barrera Carbonel

elementos básicos para la subsistencia, y por lo tanto, tal sistema es el medio más idóneo para corregir el impacto de la inflación sobre las asignaciones de retiro, cuando los incrementos porcentuales determinados por el DANE, sean más beneficiosos para efectos del reajuste anual de la prestación.

A lo anterior debe sumarse que la Ley 923 de 2004<sup>6</sup> indicó que para fijar el régimen de las asignaciones de retiro de la Fuerza Pública, se debe tener en cuenta como criterio y objetivo el mantenimiento del poder adquisitivo –Art. 2-, y que los reajustes de las asignaciones de retiro deben tener en cuenta, como **mínimo**, *el mismo porcentaje en que se aumenten las asignaciones de los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo* –Art. 3, 3.13-, vale anotar, el sistema de oscilación opera como una base mínima para que el administrador de la prestación realice el reajuste anual, el cual no sustituye, ni deroga los incrementos por inflación determinados en la Ley 238 de 1998, pues dicho mecanismo impera cuando produce un resultado mayor al obtenido por los porcentajes derivados del principio de oscilación, en razón del principio de favorabilidad y la conexidad con derechos fundamentales, en consecuencia, bajo este marco se debe aplicar lo dispuesto en el Art. 42 del Decreto Reglamentario 4433 de 2004.

Así mismo, la amplia jurisprudencia de la Corte Constitucional, refuerza la aplicación directa e inmediata de los Arts. 48 y 53 de la Carta Magna para ordenar el reajuste mediante el mecanismo del IPC para cualquier pensión reconocida en cualquier tiempo –antes o posterior a la Ley 100- y de cualquier naturaleza –régimen general o especial.

## 2. SITUACIÓN PARTICULAR

La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, por medio de la Resolución No. 00267 del 02 de marzo de 1973 (fls. 8 a 9) reconoció asignación de retiro al señor Agente (f) de la Policía Heraclio Antonio Muñoz Garavito, a partir del 04 de noviembre de 1972 (fls. 8 a 9)

---

<sup>6</sup> Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que deberá observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literal e) de la Constitución Política

En ocasión al fallecimiento del Agente (f) el señor Muñoz Garavito la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, reconoció la sustitución de asignación de retiro a la señora Laura María Castillo de Muñoz, en su condición de cónyuge supérstite, mediante Resolución No. 18729 del 07 de noviembre de 2012, a partir del 22 de julio de 2012 (fls. 10 a 11)

Inconforme con el aumento anual de la sustitución de la asignación de retiro, mediante derecho de petición con No. 130926 del 15 de febrero de 2016 (según data en el oficio No. 5879 /OAJ del 01 de abril de 2016 fl. 5 a 6 Vto) solicitó a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, el reajuste de la asignación de retiro con el incremento con base en el IPC en los casos que este fuera superior al aumento del Gobierno Nacional de los años 1997 a 2004; años que coinciden con los relacionados en la solicitud de conciliación prejudicial, y sobre los cuales el Despacho procederá a realizar el análisis, a efectos de establecer la legalidad del acuerdo celebrado entre las partes.

Al comparar los incrementos porcentuales realizados a las asignaciones de retiro para el grado de Agente de la Policía Nacional, según el principio de oscilación y de conformidad con los decretos 122 de 1997, 58 de 1998, 62 de 1999, 2000, 2737 de 2001, 745 del 2002, 3552 del 2003, 4158 del 2004 frente al índice de precios al consumidor para los años 1997 en adelante encontramos:

#### AGENTE

	OCSIL	IPC
1997	18,8689	21,63 (96)
1998	17,9646	17,68 (97)
1999	14,9101	16,70 (98)
2000	9,23003	9,23 (99)
2001	9,000	8,75 (00)
2002	5,9999	7,65 (01)
2003	7,0005	6,99 (02)
2004	6,4899	6,49 (03)

De lo anterior se concluye que el aumento con base en el Índice de Precios al Consumidor, fue mayor que los fijados por Decreto por el Gobierno Nacional para los años de 1997, 1999 y 2002.

Revisada la liquidación efectuada por la Caja de Retiro de la Policía Nacional, se observa a folio 12 a 17 el comparativo de aumentos salariales, con base el IPC y los aumentos del Gobierno Nacional, en el que se reseñan los mismos años con aumentos mayores, siendo coincidentes con los ya anotados.

Respecto a la prescripción de las mesadas pensionales, el Despacho observa que se dio aplicación a la prescripción cuatrienal conforme al artículo 113 del Decreto 1213 de 1990,

Se observa además que la liquidación se efectuó desde el 01 de Enero de 1997, pero el pago se efectuaría a partir del 15 de febrero de 2012, fecha que guarda relación con la prescripción cuatrienal; lo cual se encuentra ajustada a derecho, ya que la petición data del 15 de febrero de 2016 (según data en el oficio No. 5879 /OAJ del 01 de abril de 2016 fl. 5 a 6 Vto), en donde solicita el reajuste de la pensión de beneficiarios desde el año 1997, periodo en el cual la norma vigente en materia de prescripción era el decreto 1211 de 1990 Art. 174, que fijó un periodo de 4 años contados a partir de la fecha en que se hizo exigible el derecho, norma aplicable de conformidad con los lineamientos establecidos en la Ley 153 de 1887.

Es así como el Despacho encuentra ajustado a derecho el trámite de conciliación surtido para el pago de lo adeudado a la Sra. Laura María Castillo de Muñoz, así como la indexación efectuada sobre los mismos, y dado que la conciliación prejudicial ampliamente referenciada en ésta providencia es conforme a la Constitución y la ley, el contenido de la misma no lesiona el patrimonio público; ésta sede judicial le da su aprobación.

Por lo expuesto, el JUZGADO VEINTIUNO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ, SECCION SEGUNDA,

**RESUELVE:**

**PRIMERO: APROBAR** el acta de conciliación prejudicial REG-IN-CE-000 con radicación No. 89080 del Veinticinco (25) de agosto de 2017, y realizada el Diecisiete (17) de Octubre de dos mil diecisiete (2017), expedida por la procuraduría

86 judicial I para asuntos administrativos, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

**SEGUNDO:** La **CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL**, realizará el pago a la Sra. Laura María Castillo de Muñoz, identificada con la C.C. 20.712.068 de Bogotá, conforme a la conciliación celebrada entre las partes.

**TERCERO:** La reliquidación se realizara a partir del año 1997 y a la suma insoluta que resultará, la entidad aplicará la prescripción, de las mesadas por lo que, **el pago se efectuará a partir del 15 de febrero de 2012**, pagos a los cuales se le realizarán los descuentos señalados en la ley, y la diferencia que resultare será actualizada en los términos del artículo 187 inciso 4 y el Art 192 y 195 del C.P.A.C.A, según la formula mencionada en el aparte pertinente de las consideraciones.

**CUARTO:** Se reconoce y se tiene al Dr. **LUIS ENRIQUE ROMERO**, identificado con la C.C. No. 19.354.613 de Bogotá y T.P No. 58.119 del C.S. de la J., como apoderado de la parte actora conforme al poder visible a folio 3 del expediente.

**QUINTO:** Envíese copia de esta decisión a la Procuraduría 86 Judicial I para Asuntos Administrativos.

**SEXTO:** En firme ésta decisión, expídanse las copias a los interesados, déjense las constancias respectivas y archívese el expediente.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, Y CÚMPLASE.

  
**ROSSE MAIRE MESA CEPEDA**  
JUEZ